

ARTÍCULO 99. Las renunciaciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, serán enviadas para su aprobación al Senado y, en su receso, a la de la Comisión Permanente.

COMENTARIO: Tres ideas predominaron en el Constituyente de 1917 en torno a la organización del Poder Judicial federal: 1ª Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionara de modo permanente en pleno (en forma similar a la Suprema Corte norteamericana) con la presencia de los once ministros

que debían componerla, uno de ellos actuando como presidente, tanto para dirigir los debates como para actuar en la esfera de todo lo administrativo concerniente a la Suprema Corte como tribunal supremo del país. 2ª La inmovilidad de los ministros para que pudiesen responder con eficacia a su elevada función, sin el temor de ser removidos por cuestiones de criterio jurídico o política, o por divergencias derivadas de posibles intereses de cualquiera de los otros miembros integrantes de los demás poderes (esta inamovilidad fue suspendida el año de 1936 y restituida el año de 1945). 3ª La de una permanente responsabilidad del cargo, a efecto de que la actuación judicial esté en todo momento imbuida con plenitud, de amplio espíritu de justicia y orientada a la defensa de los principios constitucionales (en mayor grado de las garantías individuales); e igualmente apoyada en la imparcial determinación y esclarecimiento de los derechos violados haciéndose honor al viejo principio romano de "dar a cada quien lo suyo".

A ello fue debido que el constituyente, en la preparación del artículo que se comenta, expresara que "el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo es renunciable por causa grave, calificada por el Congreso de la Unión, ante el que presentará su renuncia. En los recesos de éste —se agregó— la calificación se hará por la Comisión Permanente." Esta redacción estuvo vigente por un periodo mayor de diez años, pues se pretendió, en apoyo de esta norma constitucional, que el profesional del derecho nombrado para tan honroso cargo, no solo llenase los requisitos formales apuntados al realizarse el examen de los artículos anteriores (artículos 95 y 97) sino que, como fuera exigido después, gozara de buena reputación y no hubiese sido condenado por delito que ameritara pena corporal de más de un año de prisión.

A lo largo de la permanencia de este principio formal, se ha procurado evitar que presiones externas de diversa naturaleza puedan influir en el ánimo de un ministro para llevarlo al abandono del puesto; o que otro tipo de intereses personales lo inclinen al desempeño de una función distinta, por suponerse que la dignidad conferida otorga un privilegio de por vida, en el que un ministro debe sentirse respetado y respetable, sea porque el obtenerlo represente el coronamiento de una esforzada carrera judicial o porque los méritos adquiridos en la práctica profesional constituyan el mejor reconocimiento de una labor tesonera, ardua, activa, consciente y largamente ejercida.

Por esta razón es posible pensar que la única reforma introducida en este artículo de nuestra ley fundamental responda a semejante propósito. En efecto; la reforma de fecha 20 de agosto 1928 facultó al Ejecutivo federal, como autoridad encargada de proponer el nombramiento de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de recibir a su vez cualquier solicitud de renuncia del cargo, a efecto de analizarla y estudiar los motivos de tal renuncia y si estimaba éstos procedentes, la aceptase, enviando al Senado dicha aceptación para que sea este cuerpo colegiado quien en última instancia resuelva sobre su aprobación, siempre que se encuentre en funciones cuando le sea enviada; correspondiendo admitirla y resolverla a la Comisión Permanente cuando ésta actúe por mandato constitucional.

Mucho se ha especulado sobre las causas que puedan estimarse graves para

que un ministro renuncie a tan elevado y honroso cargo. Hemos supuesto las personales, que sólo ameritarán explicación directa por parte del interesado al señor presidente de la República, quien las revisará, tomará en consideración el interés privado del solicitante y después de alguna reflexión procederá al trámite legal de la renuncia. Tales podrían serlo, por ejemplo, ya que encontramos en un terreno altamente subjetivo, el haber adquirido una enfermedad o una incapacidad física o de otra índole que por su naturaleza impidan al ministro continuar el desempeño de la función encomendada; puede ser la causa de carácter familiar o para la solución de asuntos relacionados con el hogar, los cuales ameriten la atención directa personal del funcionario. Podrían estimarse inclusive las de estricta necesidad de traslado a lugar distinto al de residencia del Poder Judicial federal. En fin, son varias las circunstancias que pudieran presentarse y dar lugar a la renuncia.

Pero las hay de otro orden. En decenios recientes varios señores ministros han sido designados para cumplir una función política específica, como la de terminar un periodo de gobierno local; esto es, actuar en calidad de gobernador sustituto o interino en ausencia de los titulares por elección popular, sea por muerte o por motivos políticos incluidos la posible desaparición de poderes de un estado, dictada por el Congreso de la Unión, o por cuestiones internas de las propias entidades federativas. A otros señores ministros se les ha invitado a contender en elecciones para el desempeño de cargos de representación popular (senadores o diputados); y alguno ha ocupado puestos de relevancia en la administración pública federal o de los estados (secretarios generales de gobierno y otros). Podría estimarse desde un punto de vista jurídicamente estricto, que estas causales no tienen el calificativo de gravedad que impone la disposición constitucional, pues siempre se piensa que es mayor honor para la persona el cargo de ministro de la Suprema Corte que el ocupar cualquiera otro puesto en la administración pública. Sin embargo, no dejan de ser razones importantes las que llevan al ministro a presentar su renuncia, e indudablemente de existir alguna, obligan en cierta forma al presidente de la República a su aceptación, llevándose entonces a cabo el procedimiento a que se ha hecho alusión, con intervención de los otros dos poderes de la Federación: el Ejecutivo y el Legislativo. Por fortuna, no se tiene noticia hasta la fecha, de ningún ministro que hubiera sido presionado a renunciar, sea en virtud de ataques de orden político o social, o a causas graves comprobadas, pues ha privado el buen criterio ciudadano sobre la conducta y honestidad de nuestros altos funcionarios encargados de la justicia federal; y si en ocasiones han existido críticas a su labor, éstas han sido canalizadas a través de los cauces jurídicos u oficiales, con el debido respeto a su integridad moral y profesional. Es lógico que exista la prevención de la mencionada facultad, pero en casos extremos, personales o de absoluta necesidad.

Véanse los comentarios a los artículos 94, 95, 96, 101, 102, 104 y 105 de la Constitución federal.

BIBLIOGRAFÍA: Barquín Álvarez, Manuel, "La desaparición de poderes en las entidades federativas", *Anuario Jurídico*, México, 2, 1975, pp. 7-23; Carrillo

Flores, Antonio. *La justicia federal y la administración pública*, 2ª ed., México, Porrúa, 1973. pp. 56-67; Orozco Henríquez, José de Jesús, *El derecho constitucional consuetudinario*, México, UNAM, 1983, pp. 21-27; Tena Ramírez, Felipe, *Derecho constitucional mexicano*, 17ª ed., México, Porrúa, 1980, pp. 471-499; Valadés, Diego, "Problemas de la reforma constitucional en el sistema mexicano". *Los cambios constitucionales*, México, UNAM, 1977, pp. 191-211.

Santiago BARAJAS MONTES DE OCA